

APERTURA ECONOMICA- SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMIA CAMPESINA ¹

Free market, food security and peasant economy

Gilberto Herrera Rojas ²

RESUMEN

Las importaciones agrícolas sin restricciones que vinieron con la apertura económica, especialmente las de maíz y frijol que se hicieron durante el segundo semestre de 1995, afectaron fuerte y negativamente a los productores colombianos, sobretudo a los campesinos. En estudios de caso realizados en la provincia Guanentina de Santander, se comprobó que los campesinos sufrieron fuertes pérdidas en la cosecha de frijol del segundo semestre del año anterior. Los precios al productor se derrumbaron a casi el 60% de los precios históricos, por culpa de las importaciones indiscriminadas de frijoles provenientes de Canadá, China, USA, Ecuador y Perú (sin contar el contrabando que llegó por las fronteras de Ecuador y Venezuela). Los productores colombianos están muy lejos de poder competir con los precios internacionales que oscilaron entre US\$ 0,40 y US\$ 0,60 el kilogramo, mientras los costos de producción estaban por encima de los US\$ 0,80 el kilo. Esa cosecha arruinó a miles de campesinos en Santander, algunos de los cuales emigraron hacia las ciudades de la costa atlántica.

¹ Este artículo hace parte de la investigación sobre globalización-seguridad alimentaria y economía campesina del PRIAC y la Facultad de Agronomía. El autor agradece, especialmente a NATALIA RODRIGUEZ, Nutricionista Dietista adscrita al grupo, quien colaboró en la búsqueda y organización de la información, así como en la revisión y corrección del texto.

² Profesor Asociado, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, D.C.

Las importaciones de maíz, el año pasado, casi se duplicaron y los precios que recibieron los productores nacionales cayeron en casi un tercio. En 1996, los precios reaccionaron por factores coyunturales de corto y mediano plazo en USA y en la China. La tendencia en los mercados mundiales es que los grandes productores quebrarán la producción de países como el nuestro que dependerán, cada vez más, de las importaciones. Colombia está muy lejos de poder competir con los rendimientos, costos de producción y precios de Canadá, USA y Argentina.

El dilema es que ambos cultivos son parte crucial de la seguridad alimentaria del campesinado y del país.

Palabras claves: Seguridad alimentaria, campesinos, apertura económica.

SUMMARY

Agricultural importation without restriction which come with international free market, especially corn and kidney beans, during the second semester of 1995, affecting strongly and negatively the Colombian growers, especially the peasants.

Some studies made in Guanentine Santander's province, show that the small farmers lot significant in kidney beans harvest during the second semester, last year.

Grower's prices decreased around 60% of the historic prices, because of kidney beans importation from Canada, China, USA, Ecuador and Perú (without considering illegal importation from Ecuador and Venezuela).

Colombian growers are too far the compete with international prices which were around US\$ 0,40 - 0,60 per Kg. While the production cost was US\$ 0,80 per Kg.. These harvet improved thousands of santandereans peasantraies, some of them migrated to the Atlantic coast cities.

Corn importations last year were duplicated and the prices which National growers received, dropped down around one trird. In 1996 corn prices rose up in response of coyuntural factors of short and medium time in the United States and China. Trend of international market granes is that biggest growers will break the production of countries like ours, which will depend more time on importations.

Colombia is too far from competing with corn productivity, production cost's and prices with Canada, USA, and Argentina.

Dileme is both crops are crucial part of peasantry food security and country itself.

Keywords: Peasant, kidney beans, food security

Con la aceptación de los acuerdos de la Ronda de Uruguay, la creación de bloques en América, como el NAFTA, el G-3, MERCOSUR y, finalmente, con la firma, por parte de los países industrializados, de los acuerdos del GATT (a pesar de las reservas impuestas por la Comunidad Económica Europea, con Francia a la cabeza), la internacionalización de los mercados es un hecho.

Tales reservas y condicionamientos son un reflejo del esfuerzo que realizan los países industrializados por proteger sus sectores agropecuarios.

Resulta innegable que la llamada apertura tiene un objetivo para las economías excedentarias, agobiadas por una larga crisis que

se expresa en la dificultad de mantener la tasa media de ganancias, la acumulación de capitales y de mercancías, la aceleración de la automatización y el consiguiente desempleo que agudiza la disminución de la demanda (complejo que se conoce como recesión).

Otro sentido bien diferente tiene la apertura para los países «subdesarrollados» o, como eufemísticamente se denominan «países en vía de desarrollo», que poseen aparatos productivos obsoletos, ineficientes, diferenciados, orientados, en parte a la producción de materias primas y productos primarios para la exportación o a la producción de bienes y servicios para el mercado interno, por medio de la agricultura y una industria ligera y mediana.

En estos países tercermundistas, existe una marcada diferenciación al interior del aparato productivo industrial, caracterizado por la presencia de oligopolios (cuya modernización va al ritmo general de acumulación), algunos de los cuales ya poseen capacidad de exportación y dominan el mercado interno, en el cual coexisten con una galaxia de industrias medianas y pequeñas que tienen productividad baja, así como escasa capacidad para cubrir el mercado interno; adicionalmente están sometidas a altos costos de producción y generalmente son subordinadas al capital financiero y de la gran industria.

Para Colombia, quien negoció aranceles para la importación de productos agrícolas, la inclusión de plazos y cláusulas de salvaguarda, tiene el sentido de proteger una actividad agropecuaria golpeada con el desmonte de subsidios, créditos, apoyo investigativo y otros servicios institucionales e inmersa en los conflictos, nunca resueltos, de la concentración de la propiedad territorial y de un enfrentamiento armado que desangra, causa terror, ausentismo y deprime la actividad económica.

Los estudios realizados sobre este sector concluyen y el propio Gobierno acepta, que los oligopolios obtienen ganancias extraordinarias por el control que ejercen sobre:

- Las fuentes de materias primas.

-Los mercados de consumo, a través de la diferenciación de sus productos y la discriminación de los precios.

-Los medios de comunicación, por los cuales proyectan agresivas campañas publicitarias.

-El crédito y los precios, a través de diferentes mecanismos que van, desde el liderato, hasta la guerra de precios, como se ha visto recientemente con los pasajes aéreos, bebidas, refrescos y alimentos soplados.

La mediana industria tiene que soportar tal competencia con desventajas adicionales, como son los mayores costos por las escalas menores en sus líneas de producción.

Las posibilidades de la pequeña industria son más escasas porque no tiene acceso a las ventajas que se le ofrecen a las grandes industrias.

También, existe una marcada diferenciación entre los sectores económicos urbanos con el sector agropecuario y al interior de éste, cuyo subsector moderno ha crecido, gracias a la protección del Estado (porque, históricamente, ha tenido mercados cautivos), a los subsidios, a la disponibilidad de tecnología, a la asistencia técnica y a otros apoyos estatales. Tradicionalmente, ha gozado de la ventaja que le permite la existencia de una economía campesina que le proporciona mano de obra y alimentos relativamente baratos, así como de percibir unos precios aceptables para su propia producción, por lo menos, hasta antes de la apertura.

La capacidad de este subsector moderno para generar excedentes exportables es, en el corto y mediano plazo, bastante relativa, si se exceptúan las flores, el café, el banano y algunas frutas tropicales, por cuanto su estructura productiva no puede competir con agriculturas muy desarrolladas, protegidas, poseedoras de altas inversiones en tecnología, máquinas e infraestructura, con elevada productividad y sobre todo, con poderosas redes de apoyo, tanto para la producción, como para la transformación y comercialización.

En este punto, surge una pregunta clave: ¿ con cuáles productos agropecuarios va a competir Colombia en los mercados mundiales? La competencia mundial en los mercados de cereales, azúcar, cacao, productos cárnicos y derivados lácteos, expresada en una caída pertinaz de sus precios, indica que la competitividad nacional es irrazonable. Escasamente, puede mantenerse en el mercado con flores, banano y café (cuyos precios internacionales están en una crisis).

Existe alguna perspectiva con el algodón, pero las pérdidas acumuladas de los productores han sido tan grandes y sostenidas, que se demorarán varios años en volver a exportar volúmenes importantes.

Los casos recientes de rupturas de pactos y disminución de cuotas en café y banano, son claros ejemplos de las tendencias futuras. El primero, aunque aumentó el volumen en sacos exportados, bajó el monto de dólares recibidos en un 11% en 1994.

En 1.993, Colombia disminuyó el valor de su producción de café pergamino en un 13,01%. En 1995, la situación cafetera fue mucho peor y no hay síntomas de mejoría para 1996. Este renglón incluso ha perdido rentabilidad por efecto de la broca, el encarecimiento de los insumos industriales y el desasosiego regional que representa el desempleo y el reciente ingreso de los grupos armados a la zona cafetera.

Durante 1.993, se aumentó el volumen físico de exportaciones de banano un 11%, pero el valor recibido, solo creció en un 8%, en un año que se consideró que «Colombia salió bien librada».

En 1995, los exportadores de banano tuvieron que librar una dura batalla para impedir sanciones comerciales por parte de los Estados Unidos, por el hecho de haber firmado acuerdos de cuotas con el Mercado Común Europeo.

Cultivos, como el tabaco, el cacao, la caña de azúcar y el café, tienden a sufrir una profunda y permanente caída en su demanda, por cambios en los hábitos de consumo y por la aparición de productos sustitutos.

Sólo quedan las flores y las plantas ornamentales como renglones promisorios, con serios interrogantes sobre su futuro acceso a mercados tradicionales (con todas las restricciones que se están aplicando en el mercado internacional respecto a cuestionamientos de los procesos locales de producción).

Son inciertas las posibilidades de las maderas, las plantas y animales silvestres, en vías de extinción, las frutas tropicales, etc. Por otra parte, existen poderosas barreras sanitarias para algunos cultivos, como flores, frutas y banano, este último sometido a la competencia de Centroamérica y de las antiguas colonias de la comunidad europea.

Se puede argumentar que Colombia posee tierras fértiles y gente laboriosa que puede abastecer mercados vecinos, como Venezuela, Ecuador y Centroamérica, así como los mercados del Pacífico que son deficitarios. Sin embargo, la colisión de intereses entre los países industrializados (con abultadas producciones para exportar, subsidios y otros mecanismos proteccionistas) frente a la producción, hipotéticamente creciente, de todos los países tercermundistas, podría hacer quebrar las agriculturas de los más atrasados tecnológicamente y los más débiles.

Los apologistas del neoliberalismo aseguran que la mano invisible del mercado asignará los recursos escasos, de manera que cada país produzca aquello para lo cual posee ventajas comparativas y, en tal caso, las señales del mercado le indicarán a los productores, en cada país, cuándo deben abordar la producción de determinados productos, para los cuales pueden obtener menores costos o mayores productividades. Las tradicionales funciones del Estado, encaminadas a equilibrar la iniciativa privada con la función social del capital, son renunciadas en favor de los empresarios, sin miramientos sobre el origen y estructura de los capitales.

Ahora, el Estado reduce su tamaño y sus funciones, para dedicarse a facilitar la infraestructura necesaria para la libre circulación de mercancías y capitales, ofrecer mayor transparencia de los mercados y a prestar servicios básicos, que no son atractivos para el capital privado.

Todos los agentes económicos, sin discriminación, deben quedar expuestos a las fuerzas del mercado para estimular la competitividad.

Este planteamiento optimista, y aparentemente ingenuo, da poca importancia al revolucionario cambio tecnológico que se está gestando en los países industrializados, sobre la base de la bioingeniería que permite a las multinacionales que están liderando el proceso apropiarse de los mercados futuros de novedosos bioinsumos, como son las plantas transgénicas, los biocidas, los microorganismos, etc, artificialmente configurados, para la producción de sustancias que, hasta ahora, sólo se podían conseguir con plantas y animales en su estado natural. La propiedad intelectual, implícita en los tratados de comercio, asegura el control de la biodiversidad, vía patentes, en favor de tales multinacionales.

Por supuesto que los excedentes que generarán los nuevos procesos productivos con este nuevo esquema serán, en gran medida, apropiados por ese tipo de empresas, con sus casas matrices en los países desarrollados. Así, nuestros productores empresariales tendrán que comprar esos insumos tecnológicos a altos precios, si quieren competir con productividad y vender barato en mercados cada vez más competidos.

La apertura alimentaria se expresa en una avalancha de alimentos procesados, aparejada de una publicidad encaminada a cambiar los hábitos alimentarios, para sustituir los productos naturales autóctonos que, aunque sean de bajo valor nutritivo y rústicos, son muy superiores a los comestibles que no son nutritivos y alimentos basura que nos están llegando, como los cereales soplados, los *chips*, algunos enlatados, dulces, chocolates, chiclets, cervezas, etc.

Nuestros países tercermundistas todavía no han hecho un balance realista de lo que nos deja la Revolución Verde y ya, alegremente, acogen con entusiasmo, sin balance de inventario, la nueva revolución de la bioingeniería, sin percatarse, siquiera, del costo que ello implica.

Muchos aseguran que no hay quién pare la modernidad y que el progreso es una máquina que, sólo, los ilusos creen que se puede detener. El problema no es subirse a ese tren. El reto es conducir el tren propio y saber para dónde va.

La pérdida de la biodiversidad, de la que hacemos gala ahora, la parálisis en la discusión y en la capacidad de investigación para formular un modelo de desarrollo que privilegie nuestro propio proceso histórico y nuestros recursos, como únicos instrumentos para la utopía del futuro, serán parte del precio a pagar por negarnos a hacer frente a los problemas estructurales de nuestra sociedad.

Para nuestra clase dirigente y nuestros altos tecnócratas, es más cómoda la subordinación a las supuestas leyes del mercado y a las tendencias de los centros del poder, que abordar, con creatividad, valor y visión, la realidad de una sociedad tremendamente polarizada, con una estructura de la propiedad territorial que difícilmente puede asimilar algún patrón de desarrollo sostenible y equitativo.

La dura realidad de unas regiones atrasadas, con bajos niveles de calidad de vida, escasa o nula industrialización y débilmente integradas a los mercados, con crónicos problemas de desempleo, marginamiento y pobreza, se pretende solucionar con la descentralización, ignorando la omnipresencia de los caciques y gamonales de siempre, que ahora no tendrán que disputar sus feudos con el poder central. Tanto ellos, como la clase dirigente nacional, han mostrado poco interés por la suerte de millones de compatriotas que quedarán tendidos con los milagros de la apertura.

Los rélcientes ejemplos de países asiáticos, donde la apertura ha realizado «milagros», no explicitan que, en la mayoría de ellos, previamente, se han realizado profundos cambios en la estructura de la propiedad

territorial o se han mantenido dramáticamente bajos los salarios, como en el caso de la China Continental que, sin embargo, mantiene una sólida infraestructura de servicios públicos gratuitos, como la educación y la salud. Caso aparte es el de Chile, donde fue necesario aplastar las aspiraciones de la mayoría, expropiar las tierras en favor de los inversionistas, liquidar los sindicatos y reprimir violentamente a los opositores, para lograr la modernización del país.

Resulta más difícil aceptar la idea que tienen algunos sobre las posibilidades de la economía campesina en este nuevo contexto. Afirman que a los campesinos les llegó la hora de la modernización, que deben aprovechar sus ventajas comparativas, dedicar sus fundos a producir aquellas cosas que demanden los mercados nacionales y externos, utilizar tecnologías modernas, así como avanzadas técnicas administrativas para la producción y articularse en forma más dinámica a los circuitos de comercialización y embarcarse en procesos altamente rentables, etc.

Quienes hacen esas afirmaciones, olvidan que el proceso histórico del desarrollo de nuestro sector rural ha empujado al campesinado a las peores tierras, en donde se hacían en parcelas pequeñas, con una precaria dotación de recursos, sin acceso al crédito ni a los servicios institucionales y que el aparato de generación de tecnología ha sido incapaz de ofrecerles opciones rentables. Por fortuna, el Estado ha planteado, explícitamente, que, todavía, está interesado en mantener la economía campesina a través de programas como SINTAP y PRONATTA. Solamente, que estas estrategias han sido insuficientes para llenar el enorme vacío del desmonte del aparato de transferencia de tecnología para los pequeños productores.

Las Umatas no han podido responder a las necesidades del campesinado, en parte, porque la organización de los campesinos, que tales estrategias dan por un hecho, apenas existe en la intención, pues son muchas las investigaciones cuyos resultados muestran un campesinado solo, aislado, con escasa organización, desorientado, abandonado y, a veces, asustado por la violencia.³

³ Herrera, G. "Globalización y seguridad alimentaria-El impacto de la modernización del Estado y la apertura sobre las economías campesinas " Proyecto de investigación de la Facultad de Agronomía-PRIAC U.N. Bogotá. 1994

La información más reciente de Fedesarrollo ofrece signos preocupantes sobre el impacto del proceso de apertura de los mercados sobre los sectores de la economía y las consecuencias adversas que el proceso de privatización y modernización del Estado ejerce sobre las variables macroeconómicas :

-Crecimiento del déficit fiscal causado por el desmesurado aumento de los gastos del gobierno central, departamental y municipal, pero, fundamentalmente, por los costos crecientes del enfrentamiento del Estado contra el narcotráfico y los grupos alzados en armas.

-Desequilibrio creciente de la balanza comercial, por el crecimiento desbordado de las importaciones de bienes de consumo frente a unas exportaciones relativamente estables o afectadas por políticas proteccionistas de los países industrializados.

-Dinamización del alza del dólar frente al peso, que tiene enormes implicaciones sobre las deudas del Estado y de los particulares en el exterior y sobre las utilidades de las empresas que tienen que importar materias primas, bienes de capital o mercancías terminadas que se pagan en dólares.

-Corte abrupto de ingreso de divisas, porque los dólares del tráfico de estupefacientes sostenían la oferta interna y las necesidades de lavar o legalizar esos ingresos, se hacían fundamentalmente a través del comercio, la finca raíz y la ventanilla siniestra del Banco de la República.

-Rigidez en el proceso de reembolso de los dólares de las exportaciones, que es sinónimo de demoras y gravámenes.

-Crisis de la industria y del sector agropecuario por las altas tasas de interés, el contrabando y la competencia externa, especialmente, en textiles, alimentos procesados, automotores, construcción, etc., con la pérdida de empleos y la imposibilidad de absorber la mano de obra no calificada que, día a día, llega de las zonas de conflicto y de las áreas de economía campesina arruinadas y aisladas por la violencia.

-Crisis generalizada del sector agropecuario, abandonado deliberadamente por el Estado, en la pasada administración, con el argumento de la necesidad de someterla a la competencia internacional para obligarla a ser eficiente.

-Evidente caída de la producción agraria nacional: En los primeros cinco años de esta década, casi 430.000 Ha. salieron de la producción y la mitad de esa área corresponde a cereales. Para el año 1995, la SAC calculó una caída para el área de los cultivos semestrales en cerca de 40.000 has (El Tiempo, agosto 26 de 1995). El Ministerio de Agricultura expresa preocupación por la persistencia de este fenómeno que en 1996, mantiene más de medio millón de hectáreas en barbechos.

La argumentación institucional, basada en las premisas del modelo neoliberal, asume que el país debe dedicar sus zonas agrícolas a aquellas actividades que le representen ventajas comparativas, con las cuales pueda competir en precios con los mercados internacionales e importar aquellos rubros en que la producción nacional sea incapaz de producir con mayor eficiencia, productividad y menores costos. Esta argumentación ha transformado al país en gran importador de cereales, entre los cuales se cuenta el maíz, base de nuestra cultura, eslabón importantísimo de nuestra seguridad alimentaria y de la supervivencia de la economía campesina.

Esos argumentos han servido para que los países con grandes áreas cerealeras mecanizadas, tecnificadas y con altos niveles de productividad, puedan ganar en varios frentes:

-Eliminar los excedentes agrícolas (que agobiaron durante varios años sus economías y cuyo mantenimiento era costoso y su colocación en los mercados, antes de la apertura, implicaba la caída de sus precios).

-Precios más bajos de materias primas para las agroindustrias oligopódicas transnacionales, (generalmente de origen en esos países) que representan mayores ganancias, porque por su mismo carácter, no se reflejarán en bajas de precios de los productos terminados.

-Dominar los mercados mundiales a través de sus trasnacionales y de sus propios sectores agrarios, bien protegidos a través de diferentes mecanismos.

Pero no todo el mundo pierde, pues algunos sectores han apoyado abiertamente la globalización: Los grandes grupos económicos nacionales, en asocio con algunos extranjeros que recibieron, a precios de demolición, todas las empresas comerciales del Estado, licitaron, a precios irrisorios, servicios públicos y grandes obras de infraestructura realizadas con el ahorro nacional. Las agroindustrias oligopódicas transnacionales, que obtienen materias primas a más bajos precios. Las cadenas trasnacionales de comercialización que pueden aplicar guerras de precios a las cadenas nacionales, gracias al control que ejercen en los mercados financieros y sobre la información, así como tarifas preferenciales en el transporte. Los importadores, especialmente los contrabandistas, quienes han logrado considerables ganancias adquiriendo mercancías en el exterior, muchas veces de dudosa calidad y procedencia. Los narcotraficantes quienes, por este mecanismo, han logrado legalizar los narcodólares. La banca, el comercio, la industria, el Estado y los propietarios de finca raíz se beneficiaron con el flujo de dólares y mercancías baratos de ese tráfico ilegal de drogas, aunque la competencia externa contribuyó a este período de bonanza del consumo. Hasta los consumidores celebran la variedad y disponibilidad a precios bastante competitivos.

Los países industrializados son los mayores beneficiarios con la globalización, pues logran incrementar sus divisas por exportaciones de cereales y otros productos agrícolas, que se complementa con la venta de productos procesados e insumos, cada vez más caros, para la agricultura subsistente o con algún grado de protección en los países compradores.

En una primera fase, los grupos internos mencionados han apoyado este tipo de apertura, pues se pueden comprar materias primas y alimentos baratos. De hecho, el gobierno ha promovido la importación de ali-

mentos como parte de su estrategia antiinflacionaria, sin considerar que los alimentos importables, sólo representan un 7,5% del peso de la canasta familiar.

Una vez que los países grandes productores y exportadores de productos agrícolas logren quebrar nuestras agriculturas y, por lo tanto, destruir nuestros sistemas alimentarios, pueden elevar, hasta el tope de la capacidad de los mercados locales, los precios de sus productos. Las tendencias de los países industrializados así lo indica.

Por otra parte, el carácter aleatorio de la producción agrícola puede causar variaciones en la producción mundial de alimentos que implicarán costos crecientes para los países que han hipotecado su sistema alimentario.

Comienzan a percibirse señales en ese sentido con perspectivas sombrías: China será gran comprador de cereales; la cosecha maicera de USA en 1995 fue afectada por nuevos problemas fitosanitarios y por una ola de frío que afectó intensamente la agricultura de ese país; las cosechas del antiguo bloque soviético no se recuperarán en corto plazo, los cambios climáticos afectarán las cosechas de muchos países. Gracias a las desventuras de la agricultura norteamericana del segundo semestre de 1995 en el caso del maíz, los agricultores colombianos, que se aventuraron a sembrar en ese período, lograron precios remunerativos a principios de este año. Pero la tendencia muestra que, si no se protege la producción nacional de alguna manera, Colombia y especialmente los campesinos, tendrán que abandonar este cultivo vital de nuestro sistema agroalimentario.

Para producir maíz con rendimientos similares a los de USA, Canadá o Argentina y con costos inferiores a los 100 dólares la tonelada, Colombia debe recorrer todavía un largo camino, especialmente en el campo de la tecnología y de la renta de las tierras agrícolas.

Toda la información precedente, se traduce en perspectivas de aumento de los precios de los cereales en el mediano plazo, lo cual beneficiará a los países con grandes producciones y afecta severamente a los países que dependen de las importaciones.

En el mediano plazo, en los países subdesarrollados, todos salimos perdiendo, pues, al subir los precios de los productos agrícolas importados, crece el costo de vida, se empujan los salarios hacia arriba, se disminuyen las ganancias de la industria nacional, ya afectada por otros factores asociados a la apertura, y crece el déficit de la balanza comercial y de funcionamiento del Estado.

Los únicos beneficiarios serán los países desarrollados y las agroindustrias transnacionales, al igual que la banca internacional. Quedará hipotecada la agricultura que tendrá que vender o arrendar las tierras a inversionistas asociados a las agroindustrias transnacionales. Esta hipótesis tiene piso si se observa el caso argentino en donde mucha tierra ha salido de la producción por la escasa rentabilidad y donde la renta de la tierra ha caído a niveles que son una tentación para los capitales transnacionales. Recientes informes de prensa indican que, un solo inversionista norteamericano adquirió allí varios centenares de miles de hectáreas mecanizables a menos de doscientos dólares cada una.

Parece que la perspectiva de Colombia, que ya ha sacrificado un contingente grande de agricultores y de empleos rurales en la pira de la competitividad y la internacionalización, es la destrucción de su propio sistema agroalimentario, (como si no fueran suficiente los 4,2 millones de habitantes campesinos que, en 1992, se encontraban en pobreza extrema y que representaban el 70% de los pobres del país). La prensa nacional habla de dos millones largos de nuevos pobres por efecto del proceso modernizador y las presiones para intensificar el proceso explican, en parte, la crisis que soporta el país⁴. Es patética la situación en el Perú, donde los campesinos cultivadores de este grano, ya padecen hambre, impotentes para poder vender el maíz que ha llegado en grandes cantidades del exterior.

⁴ Sobre la problemática, que genera la apertura económica en el sector agropecuario, ya existen trabajos que no se citan en este artículo, pero que, por su importancia, aparecen en la Literatura citada.

EL IMPACTO DE LA APERTURA ECONOMICA Y LA MODERNIZACION SOBRE LOS PRODUCTORES DE MAIZ Y FRIJOL EN SANTANDER.

Para sustentar este documento, sólo se expondrán los casos del maíz y el frijol, para demostrar los impactos de la apertura sobre los productores de esos dos rubros. Su selección obedece a la intención de demostrar que las propuestas neoliberales, implícitamente, se proponen eliminar al campesinado o, por lo menos, contribuir al arrinconamiento que viene sufriendo, desde que el modelo prusiano comenzó a imponerse en el país.

Por comodidad e interés personal, se seleccionó a Santander para hacer el análisis.

Para el caso del maíz, cultivo que venía experimentando incrementos considerables en su área de siembra en el país, al pasar de 628.900 Ha en 1981 hasta 836.900 en 1990, ha venido sufriendo un acelerado deterioro. En cinco años el área sembrada disminuyó un 16,6% y, en 1995, cayó verticalmente por culpa de las importaciones que afectaron a los productores empresariales, quienes debieron cambiar de rubro, dentro de su sistema de producción o, en el peor de los casos, cambiar de actividad. Como ya se explicó atrás, los precios reaccionaron en 1996, pero, sólo, será en forma transitoria, mientras regresa a la normalidad la zona maicera de USA.

Pero, para el caso de los 150.000 campesinos productores, para quienes el maíz ha sido su compañero por generaciones, éstos no pueden hacer lo mismo. El maíz para ellos es mercancía y es alimento, es insumo para alimentación animal y es semilla. Seguirán sembrándolo y vendiendo sus excedentes, a pesar de que, cada vez, reciban menos por él. La merma de sus ingresos y el crecimiento de sus costos de producción conspiran contra la estabilidad de sus parcelas y de sus familias.

Ya el país está importando más de un millón y medio de toneladas anualmente. En el primer semestre de 1995, las importaciones pasaron de las 750.000TM. Para 1996, se pre-

vé una importación de 1.600.000 TM que copan, sobradamente, las necesidades nacionales y que, seguramente, presionarán los precios hacia abajo para intensificar el proceso de ruina de los productores.

Los costos de producción en los países de origen son sensiblemente inferiores a los de Colombia, en unos casos por existencia de subsidios directos o indirectos, como, por ejemplo en Venezuela, en donde sus productores recibían, hasta hace unos días, subsidio por costos de combustibles y derivados de petróleo. En un estudio realizado por Vásquez (17) en 1.993, a Venezuela le costaba U.S. 152/TM, mientras que a Colombia, le costaba U.S. 209,3/TM de maíz. Los 57 dólares restantes eran suficientes para cubrir los costos de exportación hacia Colombia y ganar.

Ahora, con el desplome de la economía venezolana y la devaluación del Bolívar, los productores colombianos ven, con justificado nerviosismo, la posibilidad de una avalancha de cereales desde el vecino país, en donde los salarios y la renta pueden ser envilecidos.

En los casos de USA y Argentina, países que están en capacidad de asumir altas exportaciones (Argentina exporta 6,5 millones de TM y los Estados Unidos más de 40 millones de TM), estos países pueden competir, por las extensiones de sus plantaciones y el alto grado de mecanización que, complementado con sus elevados rendimientos (Argentina con 4.500Kg/Ha, en la campaña 1991/1992 y USA con 7.769 Kg/Ha, en 1992), permiten una alta productividad del trabajo y, por supuesto, precios con los cuales es difícil competir.

La triangulación, mecanismo que utilizan algunos países para burlar barreras arancelarias y aprovecharse de pactos regionales, la utilizan los EEUU que nos vende maíz proveniente de Suráfrica.

Esas son las razones por las cuales se están incrementando las importaciones hasta amenazar, en forma permanente, el cultivo en nuestro país. Los precios FOB del maíz argentino están alrededor de los U.S. 120- 130/TM en nuestros puertos; los de USA, están un poco más baratos.⁵

Otra razón de disminución de la importancia del cultivo, es la disminución del consumo de maíz como tal, al pasar de 55,3 Kg/Habitante en 1960 a 32,1 Kg/hab. en 1987, por culpa de la culturización de la alimentación que, ahora, impulsa el consumo de productos texturizados, soplados y listos para consumir con base en materias primas importadas.

En relación con la autosuficiencia alimentaria, según Minagricultura (14), en el caso de cereales, ésta viene disminuyendo aceleradamente: en 1960, era del 94,8% y treinta años después, baja a cerca del 80%, pero se acelera en los últimos cinco años con las importaciones masivas de alimentos. En el caso especial de maíz, esa autosuficiencia era del 100% en 1969 y, para la actualidad, cuando estamos importando una cantidad de maíz igual a la producción nacional, esa autosuficiencia ha caído prácticamente a cerca de cero.

Bajo la óptica de la apertura económica, se ha llegado a proponer dejar en manos del mercado internacional las necesidades de cereales, para que los productores nacionales se dediquen a los cultivos de frutas y hortalizas frescas o, más irrisorio aún, que el país se especialice en la producción de alimentos precocidos. (El Tiempo, agosto 26 de 1995, Jaime Cristancho Gómez).

En Santander, en el año de 1988, se cosecharon 40.946 Ha. equivalentes al 6,44% del área sembrada del país. Se cosecharon 34.883 TM en el 88A y 22.648 TM en el 88B, equivalentes al 6,53% de la producción nacional, la cual fue de 880.500 TM.

Las importaciones golpean en forma específica y directa a los campesinos santandereanos, pues allí el maíz tradicional, en el 88A, llegó a 23.251 Ha. que produjeron 25.648 TM con un rendimiento de 1.103 Kg/Ha, mien-

⁵ Estos precios y conversiones de nuestra moneda en dólares de los Estados Unidos corresponden a los vigentes a mediados de 1995, cuando comenzó a redactarse este artículo.

tras que el maíz tecnificado, sólo representó 4.158 Ha., con rendimientos de 2.221 Kg/Ha.

Estos rendimientos representan apenas el 25% de los argentinos y un poco más de la sexta parte de los de USA. Para cualquier lego, resulta un cambio tecnológico formidable equiparar nuestros rendimientos con Argentina y mucho menos con USA. En el lenguaje neoliberal, Colombia no debería volver a sembrar maíz por no tener ventajas comparativas y, en consecuencia, todas sus necesidades de ese cereal debe importarlas. Aparentemente es lo correcto. El precio es la destrucción de la economía campesina y la ruptura de la seguridad alimentaria, además de lanzar al cesto de la basura, uno de los principios fundamentales de nuestra cultura.

Si se observa la evolución de las áreas sembradas, rendimientos y la producción en los siguientes años, se ve que la producción se va reduciendo a las necesidades de la economía campesina y a algunas demandas regionales. Los maíces amarillos, parte importante del esfuerzo nacional del desarrollo tecnológico en este cultivo, no tiene gran apetencia para la industria oligopódica internacional con sede en Colombia y, sólo, servirá para concentrados animales, siempre y cuando pueda competir con el sorgo. Los campesinos de esta zona no pueden sembrar tabaco ni fique porque están expresamente desestimulados por el Estado. En el futuro, tampoco, podrán sembrar maíz, pues será más barato comprar el que necesiten que producirlo. Surgen dos preguntas: ¿con qué lo van a comprar? ¿En dónde se está vendiendo el maíz barato que aquí se plantea?

Santander produce maíz en las provincias de Soto, García Rovira, Vélez y en el Magdalena Medio.

Los comerciantes mayoristas, quienes compran, tanto el maíz importado, como el nacional, no discriminan precios para la venta y obtienen ganancias extraordinarias y, por eso, apoyan la apertura. Igual sucede con la agroindustria nacional.

Como se verá a continuación, los campesinos santandereanos y de otras regiones, tampoco, podrán sembrar frijol. Todavía existen apologistas que insisten en que ese campesinado debe ser competitivo, creativo, abordar procesos que impliquen valor agregado, asociarse para crear agroindustrias rurales, etc.

En el caso del frijol, el área sembrada a nivel nacional varió de 110.100 Ha. en 1982, a 144.822 Ha en 1994. La producción varió de 71.200 TM en 1982 a 134.955 TM en 1994. Los rendimientos subieron de 646,7 Kg/Ha. hasta 931,86 Kg/Ha. a nivel nacional. El crecimiento en los rendimientos de 300 kilos/Ha en doce años fue el fruto del esfuerzo tecnológico del ICA y del CIAT. Con el crecimiento poblacional, estos incrementos permitieron la autosuficiencia hasta 1987, en un 100%.

Sin embargo, en los últimos dos años, el país ha incrementado vertiginosamente su dependencia en frijoles: las importaciones de frijol, tanto por la vía legal, como por contrabando, están causando la ruina de miles de agricultores. Según informaciones del Ministerio de Desarrollo, el país requiere importar semestralmente alrededor de 20.000 TM. de frijoles. En 1995, se han importado más de 40.000TM.

Si se tienen en cuenta los costos de producción y los precios internos, resulta explicable la avalancha de importaciones. Estamos importando frijoles desde China, Canadá, USA, Ecuador y Perú. Probablemente, está ingresando frijol de contrabando por Venezuela, Ecuador y desde Centroamérica. En los boletines del Incomex, se puede observar que, en el mes de Mayo de 1995, se importaron 14.200 TM de frijol proveniente de China (vía USA) Ecuador y Canadá, principalmente. Los precios que se pagaban a mediados de 1995 por esas importaciones oscilaban desde U.S 0,40 el kilo de los provenientes del Ecuador, hasta U.S 0,60 el kilo de los que vienen del Lejano Oriente, USA y Canadá.

Al comparar tales precios con los internos, de cerca de U.S. 1,00 por kilo, resulta, desde el punto de vista de la competitividad, insostenible justificar la producción nacional. En ese sentido, se puede explicar que no se

haya otorgado financiación de Finagro y Fondo Financiero Agropecuario, desde 1991 para el cultivo de frijól tradicional. La financiación para frijól comercial ha disminuído en ese mismo período, desde un monto global de \$2.659 millones hasta \$ 700 millones en 1994, lo cual muestra una clara política de desestímulo a la producción para sustituirla con las importaciones.

El alto volumen de importación y, por lo tanto, la saturación del mercado nacional con frijól proveniente del exterior, se evidencia en la disminución de su precio en el mercado nacional. De 1994 a 1995, el precio de la carga de frijól Radical bajó, en promedio, de \$ 145.000 a \$ 100.000. En el caso del frijól Bola Roja, que llegó a costar \$ 400.000 la carga, en el segundo semestre de 1995, se negoció a un valor que oscila entre \$ 200.000 y \$ 240.000 en la Central de Abastos de Bogotá.

Sin embargo, no existe una diferencia significativa en los precios de venta a mayoristas y al público entre frijól nacional y frijól importado.

El consumidor resulta aparentemente beneficiado, no porque encuentre más barato el producto extranjero, sino porque la saturación del mercado disminuye los precios del frijól en general. De este modo, quienes se benefician ampliamente en el negocio son los importadores, intermediarios y el Gobierno con el control de la inflación.

Paralelamente, la economía campesina sufre una agresión contundente; para el caso de Santander, solamente en el área del Creced de las provincias Guanentina y Comunera, que incluye los municipios productores Guanentinos de Villanueva, San Gil, Curití, Barichará, Aratocha, la economía de más 5.000 familias depende del frijól como único cultivo. En el 95% de la zona del Guanentá, se cultiva frijól radical y en el 5% restante, la variedad Calima, principalmente. Durante el primer semestre de 1995, esta provincia produjo 2.200TM, con un rendimiento de 1.200 Kg/Ha, cifra que supera el promedio nacional, el cual, para 1994, era de 931,86 Kg/Ha. (Santander, también, cultiva frijól en García Rovira y Soto)

De las 2.200TM producidas en ese semestre, la Cooperativa de Villanueva compró 1.800TM, con las cuales, prácticamente, saturó sus bodegas y tuvo grandes dificultades para colocarlo en el mercado, a pesar de que en el mes de julio, se acordó con el Ministerio de Agricultura, que el IDEMA compraría el frijól desde ese mismo mes, a un precio de \$104.000 por carga de la variedad Radical (equivalente a US 0,83 kilo) e incluso se proyectó un incremento de \$7.000 por carga a manera de subsidio; durante varios meses, se estancó la compra y el IDEMA, al final, intervino, pero los precios fijados arruinaron a muchos campesinos.

Recurrir a otros canales de comercialización significa recibir menos pesos, pues los intermediarios pagaban, en ese momento, hasta \$100.000 por carga de frijól Radical, equivalentes a US 0,80 el kilo y hasta \$85.000 por carga de frijól Calima, equivalentes a US 0,68 el kilo. Si se tiene en cuenta que el costo de producción por hectárea (con rendimientos de 1.200Kg/Ha) eran de \$ 860.000, que representaban un costo de US 0,75/Kg, los anteriores precios no resultaban rentables, ni podían competir con los frijoles importados; no podían vender ni siquiera al costo. Es de tener en cuenta que, desde el primero de septiembre de 1995, el precio de los insumos se incrementó en un diez por ciento y que un jornal, sin alimentación, actualmente, cuesta \$5.000,

Ante las perspectivas que ofrece la apertura económica, los campesinos se verán obligados a reducir sus áreas de cultivo, alternar con otros cultivos, vender semovientes o hipotecar la parcela para cumplir con los créditos. Adicionalmente, muchos se verán obligados a emigrar para ofrecer su fuerza de trabajo y la de su familia en otras partes, ante la imposibilidad de encontrar ocupación en la agricultura de su región.

La opción de reducir y alternar la producción, no es, en realidad, viable, puesto que sólo se podrían vender pequeñas cantidades a particulares, a mayores costos de producción sin que ésto sea una garantía que les permita la conservación de su economía, con

el agravante de que, en la zona, se carece de sistemas de riego, lo cual dificulta, aún más, la posibilidad de diversificar los cultivos.

Los ensayos que han realizado algunos campesinos de diversificar con patilla se han estrellado con las importaciones venezolanas que permiten colocar el producto en Bucaramanga a precios que no justifican siquiera la cosecha y el transporte.

El grupo El Común, gran movimiento asociativo de Santander, promovido y liderado por SEPAS⁶, apoyó la creación y consolidación de la Cooperativa de Agricultores de Villanueva que afilió a un sinnúmero de campesinos y aglutinó a todos los campesinos frijoleros. Hace un par de años, llegó a realizar transacciones de compraventa de frijol por valores cercanos a los diez mil millones de pesos, ofreció financiación suficiente y oportuna a los productores, hasta consolidar un sistema de producción y comercialización de frijol en Santander que era un orgullo y un ejemplo de las posibilidades de la cooperación y la solidaridad.

Cuando el Estado comenzó a desmontar su sistema de generación y transferencia de tecnología y los servicios de apoyo a la producción, no les preocupó demasiado, porque su Cooperativa podía cubrir esas necesidades con los excedentes de la comercialización. Bastaron dos o tres cosechas, bajo el fuego de las importaciones, para que las operaciones se redujeran a la quinta parte y la Cooperativa se viera precisada a mantener las compras a sus afiliados para evitarles la miseria, cosechas que el Idema ni nadie quiere comprar, a menos que sea a precios iguales o inferiores a los de importación. Este enorme esfuerzo y opción distinta de desarrollo basado en la solidaridad amenaza derrumbarse con el manotazo de la apertura, porque dizque era indispensable para impulsar el desarrollo del país. Para sobrevivir, la Cooperativa ha tenido que concentrarse a su actividad bancaria, asegurarse con las debi-

⁶ SEPAS es una sigla del Secretariado Pastoral de la Iglesia Católica, que ha incorporado a la cultura de los campesinos, una Iglesia moderna, comprometida con su suerte y que es promotora del movimiento EL COMUN.

das garantías y competir con los intermedios, mediante una intervención modesta en el mercadeo del frijol.

Los primeros hallazgos de la investigación de campo que el grupo agroalimentario del PRIAC (Programa Institucional de Apoyo a la Comunidad) de la U.N. realizó a principios de 1996 en Villanueva, muestran el desconcierto del campesinado, el crecimiento de su pobreza, la intensificación de la migración de la fuerza de trabajo hacia Barranquilla, el endeudamiento y la oferta de parcelas por la falta de opciones.

BIBLIOGRAFIA

ACEA. 1992. El sector agropecuario colombiano frente a la internacionalización de la economía. Memorias de la primera reunión nacional de economía agrícola, Bogotá, noviembre de 1992.

ALACEA. 1991. De la crisis al crecimiento. Tercer congreso de economía agrícola de América Latina y el Caribe. Memorias. Bogotá.

BOLSA DE CEREALES. 1993. Número estadístico 1.992/93. Buenos Aires, Argentina.

CENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS. 1995. Poco campo para el agro. El Tiempo, Junio 5.

CRISTANCHO, J. 1995. No ceden los altos precios agrícolas. El Tiempo, Tierras y Ganados, Pag 1 y 5B, Agosto 26.

D.P.N. 1995. Competitividad sin pobreza: Estudios para el desarrollo del campo en Colombia. T.M. Editores - Fonade. Bogotá, Colombia. (Capítulos 1, 3, 4, 5, 9 y 13).

EI TIEMPO. 1995. Crisis del agro toca a casi todos. El Tiempo, Sección 6C. Julio 22 y 23.

IDEMA. 1995. Comparativo compras nacionales, por productos. Listados, Bogotá.

IICA. 1994. Los Andes en cifras. IICA-CIRA. Santiago, Chile..

INCOMEX. 1995. Registros de importaciones por subpartidas arancelarias. Mayo-Julio de 1.995. Boletines del Incomex, Bogotá.

FAO. 1993. El estado mundial de la agricultura y la alimentación. FAO. Roma, Italia,

HERRERA, G. 1994. Impacto de la apertura económica y la modernización del Estado sobre las economías campesinas. Proyecto de investigación. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Agronomía, Bogotá.

JARAMILLO, C. F. 1994. Apertura, Crisis y recuperación. Fonade. Tercer Mundo Editores, Bogotá.

MACHADO, A. 1992. Desarrollo Rural y Apertura Económica. IICA-Serie de Documentos Institucionales No 002 -Oficina del IICA en Colombia, 12p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 1989. Estadísticas del sector agropecuario en Santander 1988. Goberna-

ción de Santander, Secretaría de Planeación Departamental, URPA, FRID Impresores- Imprenta Departamental, Bucaramanga.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1995. Estadísticas del sector agropecuario. Anuario 93-94. Bogotá.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1996. Estadísticas del sector agropecuario. Anuario 93-94-95. Bogotá.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1994. La agricultura y las políticas sectoriales. Minagricultura 80 años. 360 p. Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá.

OCAMPO, J. A. y P. SANTIAGO . 1995. El giro de la política agropecuaria. T. M. Editores - Fonade - D. P. N. Bogotá. 296 p.

VASQUEZ, R. 1993. Política Agraria de la administración Gaviria. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.